

República de Colombia  
Corte Suprema de Justicia  
Sala de Casación Laboral  
Sala de Desahogo N.º 4

**ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA**  
Magistrada ponente

**SL5464-2019**

**Radicación n.º 75670**

**Acta 44**

Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por **LIBARDO RAMÍREZ NARVÁEZ**, contra la sentencia proferida el 10 de junio de 2016 por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario que adelanta contra la **ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. ESP.**

#### **I. ANTECEDENTES**

Libardo Ramírez Narváez demandó a la Electrificadora del Huila S.A. ESP., en adelante Electrohuila S.A., para que se declarara que tiene derecho al pago de la pensión de jubilación convencional, equivalente al 100% del salario promedio devengado en el último año de servicio, *[...]* a partir del 1º de agosto de 2011, o en su defecto, a partir de la fecha

Radicación R  
Legislativo 01 de  
pensión por  
diciembre

que el juzgado lo *determine*, junto con las mesadas de julio y diciembre, así los intereses moratorios previstos en artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y la sanción moratoria equivalente al salario que venía devengando, hasta la fecha en que se efectúe el pago de la pensión.

Afirmó que se vinculó con la demandada el 21 de julio de 1986, desempeñando el cargo de revisor de la zona centro y para el año 2012 devengaba un salario promedio mensual aproximado de \$2.500.000. Informó que, dado que nació el 26 de marzo de 1957, cumplió 50 años el mismo día y mes de 2007, y como siempre estuvo afiliado a Sintraelecól, era beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre esa organización sindical y Electrohuila S.A.

Agregó que por virtud del artículo 24 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 30 de diciembre de 2003, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, por haber prestado servicios por un tiempo superior a los 25 años y tener más de 50 años, razón por la que en diferentes oportunidades solicitó su derecho y siempre obtuvo respuesta negativa de la empresa, justificado en que el acuerdo colectivo perdió vigencia en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005.

Explicó que debía tenerse en cuenta el principio de la condición más beneficiosa, así como las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo proferidas dentro del caso 2434 contra el Estado de Colombia; y que como era beneficiario del régimen de transición previsto en el Acto

Redacción n.º 75670  
El 01 de 2005, tenía derecho al reconocimiento de la  
por haber cumplido los requisitos antes del 31 de  
de 2014.

La entidad, al dar respuesta a la demanda, se opuso a  
las pretensiones planteadas en su contra. En cuanto a los  
hechos, aceptó las fechas de vinculación y nacimiento del  
demandante, el cargo desempeñado por este, lo relativo a las  
reclamaciones efectuadas para el reconocimiento de la  
pensión y que la Convención Colectiva de Trabajo fue  
suscrita el 30 de enero de 2003, aclarando que su vigencia  
era por cuatro años, comprendidos entre el 1º de enero de  
2004 y el 31 de diciembre de 2007.

Adujo que no era procedente otorgar la pensión de  
jubilación convencional al demandante, por expresa  
prohibición del Acto Legislativo 01 de 2005, dado que el  
régimen pensional previsto en la Convención perdió vigencia  
el 31 de julio de 2010, fecha en la cual el actor no había  
cumplido el requisito de tiempo de servicio previsto en el  
artículo 24 y, en consecuencia, no tenía derecho adquirido a  
esa pensión.

En su defensa, formuló las excepciones que denominó  
inexistencia de la obligación demandada, falta de requisitos  
pensionales para acceder a la pensión y falta de causa para  
pedir, buena fe, falta de legitimación en la causa por activa  
del demandante y pasiva de Electrohuila S.A., falta de prueba  
legal que demuestre la existencia de la convención colectiva

de los  
garantizado  
Legislativo  
cuanto al  
aprobadas  
nuevo

de los  
garantizado  
Legislativo  
cuanto al  
aprobadas  
nuevo

de los  
garantizado  
Legislativo  
cuanto al  
aprobadas  
nuevo

de los  
garantizado  
Legislativo  
cuanto al  
aprobadas  
nuevo

de los  
garantizado  
Legislativo  
cuanto al  
aprobadas  
nuevo

de los  
garantizado  
Legislativo  
cuanto al  
aprobadas  
nuevo

de los  
garantizado  
Legislativo  
cuanto al  
aprobadas  
nuevo

de los  
garantizado  
Legislativo  
cuanto al  
aprobadas  
nuevo

14  
Radicación n° 75570  
medida por la autonomía al segundo, que eran compatibles con el Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto esta reforma constitucional garantizó los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los beneficiarios de las convenciones colectivas de trabajo.

No obstante, agregó que, por no encontrarse el demandante en ninguna de esas condiciones, no tenía derecho a disfrutar de la pensión de jubilación convencional.

Explicó que no fue objeto de discusión en el recurso, que el demandante se vinculó a la entidad demandada el 21 de julio de 1986, cumpliendo 25 años de servicios el 21 día de 2011; dado que nació el 26 de marzo de 1957, cumplió 50 años en la misma fecha de 2007 y que antes de la fecha límite para la vigencia de los derechos pensionales, prevista en el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, el 31 de julio de 2010, no satisfizo las exigencias contenidas en el artículo 24 convencional para tener derecho a la pensión.

Manifestó que en la sentencia CC SU-555 de 2014 la Corte Constitucional expuso, en cuanto a las recomendaciones de la OIT, que eran compatibles con lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, en la medida en que con este se garantizaron las expectativas legítimas y los derechos adquiridos y, por tanto, esa norma constitucional no podía ser inaplicada.

Consideró, por último, que como el actor no cumplió

1980-1981  
Sustantivo  
Politica

con los 25 años de servicio convencional, antes del 31 de julio de 2010, por ende no tener derecho adquirido ni expectativa legítima para obtener el reconocimiento y pago de la pensión solicitada.

**IV. RECURSO DE CASACIÓN**

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los términos en que fue presentado y dentro de los límites y las competencias que caracterizan a este recurso extraordinario.

## V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, "[...] REVOQUE la proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva del 7 de mayo de 2014 y se accedan (sic) a las pretensiones de la demanda".

Con tal propósito, formuló un cargo que no fue objeto de réplica.

## VI. CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia objeto del recurso de violar por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida, los «[...] artículos 467, 468, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 39, 53, 55, 58, 229 y 230 de la Constitución

Radicación n.º 75670 en relación con los artículos 1º, 13, 14 y 19 del Código del Trabajo; Convenios Internacionales 87 y 98 de la OIT ratificados por las leyes 26 y 27 de 1976; Artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 153 de 1887.

para su demostración, luego de indicar que no se discutían los aspectos fácticos de la relación laboral, ni la existencia de la Convención Colectiva de Trabajo, expuso que lo que se cuestionaba era si las reglas pensionales de origen convencional perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, por disposición del Acto Legislativo 01 de 2005, o si podían aplicarse más allá, en virtud de la recomendación emitida por el Comité de Libertad Sindical, dentro del caso 2434, y en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa.

Luego de transcribir apartes del fallo de segundo grado y consignar su particular entendimiento de la sentencia de la Corte Constitucional SU-555 de 2014, afirmó que el Tribunal debió analizar el caso a partir de lo que se entiende por bloque de constitucionalidad, es decir, aceptando que los convenios internacionales aceptados por Colombia "[...] prevalecen en el orden interno y que los Derechos y Deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia (art. 93)".

Manifestó que la Convención Colectiva de Trabajo fue suscrita el 30 de diciembre de 2003, es decir, año y medio antes del Acto Legislativo 01 de 2005, razón por la que "[...]

Radicación de  
Interpretación  
de la ley  
Aplicación  
de la ley  
Adaptación  
de la ley  
Aplicación  
de la ley

ha permanecido en el tiempo, no ha sido denunciada, no ha sido modificada, está vigente y por lo tanto produce todos sus efectos».

Destacó ampliamente las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT dentro del caso 2434, antes de concluir de la siguiente forma:

El principio de la condición más beneficiosa es de carácter tuitivo, protector y se entiende como el reconocimiento de una situación concreta que debe ser respetada en caso de un cambio normativo. El efecto general inmediato de la ley tiene su límite y excepción en materia laboral, a causa del principio mínimo fundamental de la condición más beneficiosa; por lo general la ley nueva deroga las anteriores y regula situaciones desde su promulgación a futuro, pero cuando la ley nueva va en detrimento de los derechos, condiciones o beneficios que establecía la ley anterior, la Constitución y las normas laborales obligan a respetar esa condición más beneficiosa que anteriormente reconocía la ley, o sea, la nueva ley, decreto o normativa no tendría aplicación ni sucesión normativa pues seguirá rigiéndose por la condición más beneficiosa preexistente. La condición más beneficiosa no implica, pues, que la ley no se pueda modificar ni que puedan existir cambios normativos o derogación de leyes, por el contrario, la condición más beneficiosa supone que al momento de un cambio normativo o de sucesión normativa, no se pueden desmejorar o menoscabar los derechos de los trabajadores consagrados en leyes anteriores. Si una norma nueva al momento de su expedición contraría este principio, dicha norma es inconstitucional, pues como ya se mencionó es un principio de consagración constitucional que busca la protección de la parte débil de la relación laboral.

Los principios de favorabilidad e indubio pro operario difieren de la condición más beneficiosa. El primero se presenta en caso de duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo. Las características primordiales son: (i) la duda surge sobre la aplicación de dos o más normas, entendidas éstas como "un enunciado hipotético al cual se enlaza una determinada consecuencia jurídica"; (ii) las disposiciones deben ser válidas y estar en vigor; (iii) deben regular la misma situación fáctica, y (iv) al emplearse debe respetarse el principio de la inescindibilidad o conglobamento, es decir, la norma escogida no solamente se utiliza íntegramente, sino como un todo, como un cuerpo o conjunto normativo. A contrario sensu, el principio in dubio pro operario, se presenta cuando frente a una misma norma laboral surgen varias



denunciada, no  
tanto produce todos

nes del Comité  
24, antes de

Redacción n.º 75670

interpretaciones sensatas, la cual implica la escogencia del  
ejercicio hermenéutico que más le favorezca al trabajador.  
Además, Tiene como particularidades las siguientes: (i) su  
aplicación se restringe para aquellos eventos en que nazca en el  
empleo; (ii) los jueces no están obligados, no es obligatorio su  
acoger como correctas las interpretaciones, no es obligatorio su  
propongan las partes, tanto demandante como demandado, y (iii)  
no se hace extensivo a los casos en que al juzgador pueda surgirle  
incertidumbre respecto de la valoración de una prueba, esto es, la  
que resulta de defecto o insuficiencia en la prueba de los hechos,  
dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la  
Seguridad Social consagra la potestad de los jueces de formar  
libremente su convencimiento y no los sujeta a una tarifa legal de  
prueba. Por último, la condición más beneficiosa, se distingue  
porque: (i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un  
régimen de transición; (ii) se debe coexistir una norma derogada con  
una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica  
concreta, la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le  
desmejora. (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 15 de  
febrero de 2011. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad.  
40662).

## VII. CONSIDERACIONES

Dada la orientación del cargo, en sede de casación no  
son objeto de cuestionamiento los siguientes supuestos: (i)  
que el demandante ingresó a laborar a Electrohuila S.A.  
desde el 21 de julio de 1986; (ii) que nació el 26 de marzo de  
1957; (iii) que la Convención Colectiva de Trabajo celebrada  
estableció una vigencia de 4 años contados a partir del 1.º de  
enero de 2004, y (iv) que dicho acuerdo colectivo no se  
denunció dentro del término de ley.

En ese orden, entiende la Sala que el problema jurídico  
que se le propone se contrae a determinar si el Tribunal se  
equivocó al determinar si a la entrada en vigor del Acto  
Legislativo 01 de 2005 el artículo 24 de la Convención  
Colectiva suscrita entre la demandada y Sintraelec se

encontraba vigente, para establecer si el accionante tiene derecho o no a la pensión de jubilación que en ella consagra.

Dentro de ese marco, resulta pertinente explicar que el mencionado Acto Legislativo abolió la posibilidad de que los empleadores y las organizaciones sindicales acordaran, mediante pacto, convención o cualquier otro acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el Sistema General de Pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto de la estabilidad de lo previamente acordado, dispuso un período transitorio, así:

*Parágrafo transitorio 3°. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.*

El alcance de este lo explicó esta Sala en la sentencia CSJ SL12498-2017, reiterada en la sentencia CSJ SL602-2018, en la que trajo a colación la decisión CSJ SL 31 enero 2007, radicado 31000, según la cual la expresión «*término inicialmente pactado*» allí contenida, hacía alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que «[...] si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”».

Radiación 1

acer si el accionante t  
bilación que en ella

explicar que el  
1 de que los  
ordaran,  
idico,  
da

12  
Vado de Vado N. 15470

Así lo indicó:

[...] a juicio de esta Corporación, del principio constitucional objeto de análisis se desprende una primera regla, consistente en que la expresión «término inicialmente pactado» hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el «término inicialmente pactado». Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalización sea ulterior a esta reforma constitucional.

La segunda y tercera hipótesis, básicamente expresan un mismo razonamiento, en el sentido que en el evento de que la convención haya sido objeto de sucesivas prórrogas por cuenta de lo dispuesto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como límite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales. A modo de ejemplo, si el vencimiento de un acuerdo colectivo ocurrió en diciembre de 2004 y por fuerza de la renovación legal aludida se ha extendido en múltiples ocasiones de 6 en 6 meses, las prestaciones pensionales allí previstas subsistirán hasta tanto sean eliminados por voluntad de las partes y como máximo hasta el 31 de julio de 2010.

La distinción entre ambos escenarios, a primera vista, parecería arbitraria, empero no lo es. En la primera situación, el constituyente delegado tuvo de presente la necesidad de respetar y darle plenos efectos a los compromisos y términos expresamente acordados por las partes, en ejercicio de su derecho de negociación colectiva, que les permite pactar libremente el tiempo de vigencia de los beneficios convencionales, sin que ello pueda ser abolido unilateralmente por una disposición jurídica. Se evitó así, la restricción e imposición heterónoma a lo que autónomamente habían negociado las partes y sobre lo cual recaían sus expectativas legítimas de que lo acordado iba a tener cierta estabilidad laboral.

En ese entendido, la Corte concluyó que con base en la lectura del párrafo transitorio 3.º es posible armonizar las expresiones «[...] se mantendrán por el término inicialmente estipulado» y «[...] en todo caso perderán vigencia el 31 de julio

de 2010». La primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactada por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que, desde antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, venían operando, caso en el cual las reglas pensionales subsistirían hasta el 31 de julio de 2010.

Ante este panorama, es claro que como la norma convencional de la cual deriva el derecho pensional perseguido fue suscrita con una vigencia de 4 años contados a partir del 1.º de enero de 2004, se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, pues de acuerdo con el parágrafo 3.º del Acto Legislativo 01 de 2005, las reglas de carácter pensional incluidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos que venían rigiendo a la fecha de su entrada en vigencia, perdurarían «[...] por el término inicialmente estipulado».

Por lo anterior, no es posible aceptar la tesis del recurrente en el sentido de que al no ser denunciado el instrumento colectivo, dicha cláusula pensional se prorrogó automáticamente, pues sin perjuicio de las normas de rango legal que contemplan el sistema de prórrogas y denuncias, es claro que en este caso el constituyente reguló, de manera concreta, un mecanismo que permitiera, de forma gradual, suprimir los regímenes pensionales especiales y exceptuados que, en su criterio, comprometían la sostenibilidad financiera del Sistema y creaban situaciones de inequidad (CSJ SL

Radicalización n.º 2017).

a la observancia del término para los acuerdos cuyo término inicial estuviere en  
ción expresamente pactado al momento en que entró a regir el Acto Legislativo 01  
negociación colectiva de 2005, entonces, se limitó su duración en el tiempo, hasta  
legales automáticas de cumplimiento del plazo en ellos estipulados y para aquellos  
es de la vigencia del sobre los que ya venía operando una prórroga en virtud de la  
bo, caso en el cual se fijó como límite máximo en el tiempo, el 31 de julio de  
31 de julio de 2010. Luego, resulta evidente que el Tribunal no cometió  
error alguno.

norma  
mal

Con el fin de establecer si el recurrente tenía derecho a  
obtener la prestación deprecada, se tiene que, para el 31 de  
diciembre de 2007, fecha en que perdió vigencia la  
Convención Colectiva, tenía acreditados 21 años, 5 meses y  
11 días al servicio de la demandada y 50 años, 9 meses y 6  
días de edad.

Así las cosas, resulta evidente que el demandante no  
cumplió con los requisitos exigidos por la cláusula  
convencional citada, pues si bien tenía satisfecho el de la  
edad de 50 años, no alcanzó 25 años de servicio, ni en ese  
momento ni antes del 31 de julio de 2010, como para pensar  
en el eventual «principio de favorabilidad» que reclama, de ser  
posible la confrontación de normas del Trabajo.

Tampoco resulta aplicable al asunto el principio de la  
condición más beneficiosa como lo pretende la censura, pues  
el mismo fue diseñado para la aplicación de un régimen  
precedente que está derogado, siempre que no exista régimen

encuentra el  
si la co  
si tér  
nom  
tal  
p

Radicación n

de transición y se cumpla con el requisito de densidad  
semanas establecido en cada caso, situación que no es la que  
ocurre en el caso.

Lo anterior, concuerda con la postura de la Sala  
expuesta, entre otras, en las providencias CSJ SL602-2018  
y CSJ SL1799-2018, y más recientemente en las sentencias  
CSJ SL2524-2019 y CSJ SL2528-2019, última en la que se  
dijo:

*Al reflexionar de esa manera, el Tribunal no incurrió en algún error  
jurídico, pues esta sala de la Corte ha precisado que si la  
respectiva convención colectiva de trabajo se encontraba surtiendo  
su «término de vigencia inicial», fijado por las partes de la  
negociación colectiva, y no el de sus prórrogas legales, para  
cuando entró a regir el Acto Legislativo 1 de 2005, las reglas  
pensionales mantienen vigencia solo hasta cuando finalice ese  
término de vigencia inicial y no más allá.*

*Tampoco resulta apropiado, desde ningún punto de vista, suponer  
que los beneficios pensionales de la convención colectiva  
preservan sus atributos de validez y vigencia de manera  
indefinida, por el hecho de no haber sido materia de denuncia,  
pues, como lo ha destacado esta corporación en múltiples  
decisiones, la reforma constitucional introducida con la expedición  
del Acto Legislativo 1 de 2005 estableció límites precisos y claros  
a la vigencia de esos beneficios, por el término inicialmente  
pactado o hasta el 31 de julio de 2010, dependiendo de cada  
situación.*

En la sentencia CSJ SL4781-2018, la Corte esquematizó las  
diferentes variables que contempla el mencionado parágrafo  
transitorio 3 del Acto legislativo 1 de 2005 de la siguiente manera:

*[...] Frente a los tópicos abordados por el Tribunal y por la censura,  
esta sala de la Corte ha reconocido que el parágrafo transitorio 3  
del Acto Legislativo 1 de 2005 impactó drásticamente la vigencia  
de los beneficios pensionales incluidos en instrumentos colectivos  
como las convenciones, pactos y laudos arbitrales. Igualmente, ha  
demarcado varias reglas en torno al entendimiento de dicha norma  
constitucional y específicamente de la expresión «...término  
inicialmente pactado...», de la que se valió el Tribunal.*

*En ese sentido, la Corte ha concluido que la referida disposición  
contempla varios escenarios, dependiendo del estado en el que se*

Radicación n.º

29  
contrataba el respectivo acuerdo colectivo para el momento de entrada en vigencia de la reforma constitucional, así:

i) Si la convención colectiva, pacto o laudo se encontraba surtiendo su término de vigencia inicial, fijado por las partes, para el momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, tal acuerdo solo produce efectos por el término inicialmente pactado...; es decir, el fijado expresamente por las partes.

ii) Si, contrario a lo anterior, para la fecha de promulgación del Acto Legislativo 1 de 2005 el referido término de vigencia fijado por las partes ya se había agotado y la convención, pacto o laudo se encontraba vigente por obra de su prórroga automática o en el marco de un nuevo conflicto colectivo, en virtud de lo establecido en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, los beneficios convencionales allí incluidos conservarán efectos hasta el 31 de julio de 2010.

Tal orientación fue trazada desde la sentencia CSJ SL, 31 en 2007, rad. 31000, y ratificada en las decisiones CSJ SL, 23 en 2009, rad. 30077; CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 39797; CSJ SL5844-2014 y CSJ SL12498-2017, entre muchas otras.

Por lo expuesto, el cargo no prospera. Sin costas en virtud de que no hubo réplica.

#### VIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **NO CASA** la sentencia proferida el diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016) por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario que **LIBARDO RAMÍREZ NARVÁEZ** adelanta contra la **ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. ESP.**

Sin costas, por lo explicado en la parte motiva.


Radicación n.º

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase  
expediente al Tribunal de origen.

*Salvador*  
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA


*OMAR B.O.*  
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

*Giovanni*  
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

  
República de Colombia  
Consejo Superior de la Judicatura  
Sala de Casación Laboral  
Sección de Alzada


Se deja constancia que en la fecha se fijó edicto.  
Bogotá, D. C., 19 DIC 2019 -08:00 A.M.

*[Firma]*  
SECRETARIO AJUNTO

  
República de Colombia  
Consejo Superior de la Judicatura  
Sala de Casación Laboral  
Sección de Alzada

Se deja constancia que en la fecha se desfija edicto.  
Bogotá, D. C., 19 DIC 2019 -08:00 P.M.

*[Firma]*  
SECRETARIO AJUNTO

  
República de Colombia  
Consejo Superior de la Judicatura  
Sala de Casación Laboral  
Sección de Alzada

Se deja constancia que en la fecha y hora señaladas,  
queda ejemplarizada la presente providencia.  
Bogotá, D. C., 15 ENE 2020 Hora: 08:00 H.

*[Firma]*  
SECRETARIO AJUNTO



Notificación n

implase y devuélvase

República de Colombia  
Corte Suprema de Justicia  
Sala de Casación Laboral

# EDICTO


Secretaría Adjunta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema

## HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN	ÚNICO DE PROCESO CUIP	DE DEL	410013105001201200633-01
RADICADO INTERNO:	TIPO RECURSO:	75670	
RECURRENTE:	OPOSITOR:	Extraordinario de Casación	
		LIBARDO RAMÍREZ NARVAEZ	
		E.S.P.	
FECHA SENTENCIA:		10/12/2019	
IDENTIFICACIÓN SENTENCIA:		SL5464-2019	
DECISIÓN:		NO CASA - SIN COSTAS	

El presente edicto se fija en un lugar visible de la Secretaría por un (1) día hábil, hoy 19/12/2019, a las 8:00 a.m., con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

  
FANNY VARGAS HERNÁNDEZ  
Secretaría Adjunta

El presente edicto se desfija hoy 19/12/2019, a las 5:00 p.m.

  
FANNY VARGAS HERNÁNDEZ  
Secretaría Adjunta

